

EL RECUADRO

La negociación en curso de la Ley de Presupuestos 2018 muy cerca de supera la mitad del año al que afectará, da una idea muy clara de cómo se ha desarrollado hasta ahora una Legislatura de la que los agentes económicos esperaban soluciones para asentar la recuperación y asegurarse su continuidad.

La economía, las reformas que deberían estar impulsándola, han tenido que ceder protagonismo a otras prioridades de tal manera que la exigencia de cimentar sólidamente el futuro crecimiento, ha quedado preterida y casi olvidada.

En el horizonte, además, ya está un nuevo ciclo electoral que, con citas fijas en los comicios europeos, autonómicos y municipales, se completará con los generales, y probablemente con nuevas elecciones autonómicas en algunas las comunidades fuera del calendario general. Ni ninguna de ellas por separado ni su conjunto van a favorecer la actividad normativa que la economía española necesita.

Es cierto que hay un consenso de instituciones nacionales e internacionales sobre unas perspectivas favorables para nuestra economía y que un entorno exterior más dinámico, una baja prima de riesgo, la política monetaria expansiva y los avances evidentes de la consolidación fiscal, allanan el camino.

Pero todos esos factores circunstanciales y la buena evolución de los últimos años, no bastan para ocultar que nuestra economía no ha resuelto algunos problemas estructurales que la pondrán de nuevo en riesgo cuando cambien las tendencias actuales.

No han sido en vano los esfuerzos hechos hasta ahora, fundamentalmente por particulares y empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Pero queda mucho camino por recorrer en la racionalización del gasto público y en la aplicación de medidas de impulso el crecimiento o, cuando menos, de eliminación de obstáculos y trabas.

La actividad industrial, la que en mayor medida impulsa la productividad global, la innovación, las exportaciones y la creación de empleo de calidad necesita reformas para poder dar tracción de modo firme y constante a la economía española.

La industria necesita, en primer lugar, estabilidad y seguridad. Eso significa garantías de que el riesgo inversor tomado y la innovación realizada por la industria puedan rentabilizarse primero en un mercado interior único y sólido, protegido de agresiones fragmentadoras, para que, sobre esa base, pueda proyectarse a ganar y consolidar mercados, apoyada en una imagen país asociada a la estabilidad institucional, la calidad industrial, y la coherencia exterior de las administraciones.

La industria necesita medidas específicas de apoyo hacia sectores estratégicos. La implementación de planes "prever" para bienes de inversión y consumo duradero, y la recuperación del esfuerzo inversor en infraestructuras productivas, que se debería favorecer con fuentes de inversión privada, permitirían compensar el recorte de los planes públicos de inversión, han generado.

El clima favorable a la inversión que necesita la Industria necesita, más que ayudas públicas y subvenciones, una fiscalidad adecuada que reduzca el Impuesto sobre Sociedades, especialmente para las pymes.

La Industria necesita un suministro de energía previsible, seguro y a precios competitivos, y es necesario liberalizar los precios energéticos sobre la base de una competencia real entre compañías productoras y comercializadoras contando con un "mix" de fuentes de generación, sin exclusiones por motivaciones no técnicas.

Pero la Industria necesita que la investigación se adapte a las necesidades de las pymes industriales, simplificar el tratamiento fiscal de la inversión en I+D+i, fomentar la colaboración Universidad-Empresa, mejorar la financiación y simplificar procedimientos, normativas y reglamentaciones.

Ligada a la innovación, está la formación de los trabajadores y técnicos, terreno en el que se juega una parte importante de nuestra competitividad. No es posible mejorar productos y procesos, innovar y competir, sin un personal sólidamente cualificado y capaz de seguir formándose.

Conseguir ese nivel de formación exige una colaboración entre organizaciones empresariales, centros educativos y empresas, que permita ofrecer la cualificación y las herramientas de adaptación profesional necesarias para afrontar crecientes cambios tecnológicos y exigencias competitivas.

No parece probable que el actual escenario político favorezca avances en la resolución de estas cuestiones y lo más previsible es que, de nuevo, la política se ocupe de lo urgente y olvide lo importante.